

No más Violencia Como Llave del Cambio

Plazos Inexorables en 94

- ★ Tienen que Negociar Rápido el Acuerdo Electoral
- ★ Sin el Aval Cardenista, Autoridades Bajo Sospecha
- ★ Necesario dar al IFE Nueva Estructura y Personal

LORENZO MEYER

Es un hecho desafortunado pero contundente: todos los grandes momentos de la evolución política mexicana —los fundacionales— han sido producto de la violencia extrema. Para que en el futuro el país pueda sustituir a políticos y modificar políticas en paz, es necesario dotar de credibilidad a los instrumentos centrales de consulta a la voluntad ciudadana: las elecciones. No, no va a ser fácil, se oponen muchos y

SIGUE EN LA PAGINA DOCE

Sigue de la primera plana

fuertes intereses creados, pero no hay opción.

Cuando el ex gobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido fue designado encargado del proceso electoral por el Presidente Salinas, el fraude para agosto del 94 quedó anunciado. La desaparición de Garrido de la escena política como resultado de la acción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, cambió inesperadamente el escenario, pero ello no significa que la limpieza y credibilidad electoral estén ya aseguradas. Aún estamos lejos de eso, y el tiempo apremia.

Lo que actualmente esté en juego en México, es ni

más ni menos que la oportunidad histórica de superar la tradición de la violencia política como llave del cambio. Las dos tareas inmediatas para alejarnos de la vía violenta y adentrarnos en la del cambio pacífico y democrático son: a) negociar una paz justa con el EZLN y cumplir cabalmente con sus términos, y b) hacer redundante el camino de las armas por existir una opción más atractiva para la evolución: las elecciones creíbles y su prerequisite, un sistema de partidos verdadero.

En las circunstancias actuales, el acuerdo sobre los procedimientos electorales se debe negociar rápido, pues los plazos son inexo-

rabies. Las nuevas reglas deberían entrar en vigor a más tardar el 15 de marzo. Por otro lado, y para que resulten efectivas, deben ser aceptables por la oposición no armada que ha sido más golpeada por el fraude gubernamental: el PRD. Sin el aval de la fuerza política cardenista, que es, y con razón, la que muestra mayor desconfianza frente a las reglas políticas y electorales vigentes, el proceso del 94 corre el peligro de concluir no como una solución de fondo al problema político mexicano de fin de siglo, sino como una agudización del mismo. Si la credibilidad de los resultados electorales vuelve a quedar en entredicho, como ha sido el

caso de julio de 1988 a noviembre de 1993 (Yucatán), no será posible la legitimación que la nueva administración necesitará para enfrentar los serios problemas sociales existentes. Un sistema de autoridad bajo sospecha entre 1994 y el 2000, equivaldría a renovar la invitación a iniciar otro ciclo de la tradición política vigente: la del cambio violento.

Desde su origen como país independiente, México ha transitado de una forma de gobierno a otra, mediante explosiones de violencia. Históricamente, el instrumento privilegiado del cambio mexicano no ha sido la vía legal —por inoperante—, sino la ruptura traumática, violenta, con el pasado —Independencia, Reforma y Revolución mexicana—. Dentro del régimen vigente, aún los pequeños cambios han demandado su cuota de sangre: la apertura política de Echeverría, por ejemplo, fue resultado de la matanza de Tlatelolco; la reforma política de López Portillo debió ser precedida por una guerra sucia y por los desaparecidos que aún reclama doña Rosario Ibarra.

El gobierno de Carlos Salinas y sus apoyos que con tanta vehemencia condenan la violencia del EZLN, carecen de base moral y argumentos objetivos para sustentar su posición. El salinismo no permitió que la oposición real —no la asociada al poder— encontrara en la opción electoral una respuesta efectiva a sus demandas, intereses y proyectos. El fraude siste-

mático, la parcialidad de los órganos electorales, la preservación del PRI como partido del Estado, la ausencia de la división del poder que exige la Constitución, la corrupción integral del aparato judicial, y todo el resto de las características de nuestro sistema autoritario, han mantenido cerrado el camino hacia el cambio político pacífico. La fuerza armada del EZLN logró en unos días más, infinitamente más, de lo que consiguió la marcha de los mil kilómetros de los campesinos de Chiapas hace un par de años, que fue prácticamente nada.

Los libros de texto oficiales que interpretan el pasado nacional a los escolares mexicanos, justifican plenamente, incluso glorifican, la solución violenta a las contradicciones políticas fundamentales del pasado. Esos textos justifican los levantamientos populares cuando las salidas legales ha quedado cerradas, cuando la resistencia al cambio de los intereses creados —españoles, criollos, propietarios, iglesia, ejército, hacendados, extranjeros, caciques, etcétera—, se hizo intransigente. Los propios héroes tutelares del salinismo —Juárez y Zapata— usaron en su momento la violencia en gran escala como única vía para romper la barrera infranqueable de los intereses creados. Para un gobierno que gustaba decirse heredero de Juárez y Zapata, hoy resulta muy difícil, por no decir imposible, condenar con credibilidad a quienes le retan con argumentos históricamente fundados.

El futuro no está predeterminado. El que hasta hoy las élites del poder en México se hayan negado a ceder ante otro razonamiento que no sea el de las armas, no quiere decir que así tiene que seguir siendo. Este fin de siglo abre la posibilidad de ser también, un fin de ciclo. Con un poco de suerte y, sobre todo, con mucha presión, voluntad e inteligencia de parte de la sociedad civil en su relación con el poder, aún es tiempo de echar los cimientos de una nueva forma de hacer política: una que sea, a la vez, legítima, pacífica y efectiva. Sin embargo, repito, el tiempo apremia.

Si el sistema político que se consolidó al concluir la Revolución mexicana tuvo alguna razón de ser —concentración de poder para modernizar—, hoy definitivamente ya no es el caso. El presidencialismo extremo, sin contrapesos; la centralización asfixiante y la persistencia de un mismo partido en el poder a lo largo de 65 años —con su secuela de corrupción y elecciones sin credibilidad—, son estructuras y prácticas obsoletas, disfuncionales, para la evolución y modernización real de México —incluida la económica— y son, también, una invitación permanente a la violencia política.

La sociedad mexicana se ha transformado a un ritmo relativamente rápido en el último cuarto de siglo, pero ese no ha sido el caso de sus estructuras y prácticas políticas formales. La distancia que separa al estado de derecho del estado de hecho, es cada vez mayor, y así lo ha puesto en claro el EZLN: la vida pública de Chiapas estaba determinada por muchos factores, pero entre ellos no se encontraba la ley.

En su aspecto militar, el conflicto chiapaneco se mantiene localizado, pero no es el caso de su aspecto político. Estamos aún a

Plazos Inexorables en 94

Sigue de la página doce

tiempo de enmendar el rumbo, pero para ello es imprescindible hacer creíble y atractivo el camino electoral a todos los actores políticos, incluso a los aparentemente marginales, pues fue de entre ellos que surgió el EZLN. Para lograrlo, hay que modificar a fondo las reglas vigentes del juego electoral de modo que los resultados de las votaciones no sigan estando predeterminados. Sólo entonces la oposición estaría moral y prácticamente obligada a aceptar que la lucha con votos es más efectiva y menos costosa que la lucha con balas.

El Instituto Federal Electoral (IFE), tal como está estructurado y dirigido hoy, era parte integral de lo que podemos llamar "Operación Patrocinio", es decir, de esa donde lo importante no era lograr la credibilidad del resultado electoral, sino imponer la victoria oficial del PRI. La manera como se pensaba que funcionaría el IFE en el momento de la verdad, en agosto, se probó ya el 23 de diciembre pasado. Como se recordará, en víspera de la nochebuena del 93, los representantes oficiales y oficiosos del PRI en el IFE, más los magistrados, pasaron la aplana-

adora sobre el rechazo unánime de los partidos de oposición a la cifra de 224 millones de dólares como tope de gastos de campaña para cada partido en 1994. Obviamente, sólo el PRI podía disponer para sus gastos de una suma superior a lo que gastaron en Estados Unidos todos los candidatos juntos en la última campaña presidencial. No es necesaria mucha imaginación para suponer que, de ser necesario, la maquinaria y la directiva del IFE está diseñada para funcionar en agosto de este año de la misma manera en que funcionó en diciembre del pasado: como aplanadora del PRI. Así no puede haber elección creíble.

En realidad, el gobierno le quitó toda autoridad moral a la supuesta imparcialidad política de la directiva del IFE desde hace tiempo, precisamente cuando el primer director general del instituto, Emilio Chuayffet, se transformó en candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, misma que ganó sin mayor dificultad. El director actual también ha sido un militante del PRI y tampoco proyecta la imagen de imparcialidad que las circunstancias requieren para que el IFE sea un